RAWSON, 8 de mayo de 2015.

------ VISTOS: ----------

------ Estos autos caratulados: **"C., A. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa"**
(Expte. N° 22.378-C-2011).----------

------ DE LOS QUE RESULTA:----------

------ 1. Que vienen estos autos a consideración de esta Sala del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, en virtud del Recurso presentado por el apoderado de los actores -un grupo de policías que revistan en distintas jerarquías- contra de la Sentencia Definitiva Nº 01/SCA/15 dictada por este Cuerpo a fs. 175/200 y vta.----------

------ Oportunamente dedujeron en esta Sede una acción contencioso administrativa persiguiendo una sentencia que condenase a su empleadora a pagarles diferencias salariales. Generadas éstas -entendían- por el incumplimiento de dos normas que establecen mecanismos de liquidación de haberes y que de aplicarse, producirían además su incremento hacia el futuro. Denunciaban una conducta ilícita en la liquidación de haberes por incumplimiento de estos dos preceptos: los artículos 148, segundo párrafo y art. 151, primer párrafo, in fine del Decreto Ley Nº 1561, cuyos textos respectivamente reprodujo el Digesto Jurídico como artículos 147, segundo párrafo y 149, primer párrafo, in fine de la Ley XIX Nº 8. Constituyen ambos el fundamento jurídico de la demanda. La accionada solicitó en el responde su rechazo, en el entendimiento que dichos artículos estaban derogados desde hacía muchos años, motivo por el cual no los aplicó al liquidar salarios.---------

------ El fallo -en tres votos- rechazó la acción. El primer votante efectuó un análisis pormenorizado del plexo normativo, arribando a la conclusión que los dos artículos en los que se sustenta la pretensión de diferencias salariales estaban derogados cuando se publicaron en el Digesto Jurídico Provincial. Ahondó en las ventajas y desventajas de esta última técnica empleada y acerca de la tarea encargada a una comisión de expertos, que consistía en un ordenamiento y recopilación de las normas provinciales, a fin de depurar las vigentes. Entendió que atento que esa comisión no estaba facultada para sancionar nuevas leyes y aquellos preceptos hacía muchos años que se encontraban derogados, que aparecieran publicados en aquel Cuerpo en el articulado de dicha Ley XIX Nº 8 constituían dos errores lamentables. El segundo y el tercer votante, sustentándose ambos en el análisis del sistema jurídico realizado por el primero, efectuaron un tratamiento de los mismos tópicos, coincidiendo en que sendos artículos habían sido derogados. Se explayaron en el tipo de derogación de cada precepto: expresa y tácita, en su variante derogación orgánica, respaldándose en doctrina y jurisprudencia. Enfatizaron el efecto de la derogación acaecida, que no volvieron a sancionarse nuevas leyes en el

sentido pretendido por los actores y que tampoco cabía interpretar que así fuera en el Digesto Jurídico, porque la comisión que lo elaboró no estaba habilitada para esa tarea. Concluyeron que no se trata de dos nuevos preceptos -en los que se apoyan las diferencias salariales-, sino de dos errores en la publicación de la ley de la policía en esta recopilación, que no fueron advertidos oportunamente y con consecuencias muy graves. Así se indujo a litigar a los actores, que confiaron en la tarea que el Estado Provincial encomendó a una comisión que debía ordenar las leyes provinciales vigentes. En ese entendimiento, se impusieron las costas a la demandada. Se le reprochó al Estado Provincial que no hubiera remitido el caso a otra comisión, conformada especialmente para revisar y corregir los errores de dicha recopilación normativa, pese a que expresamente argumentó en la contestación de demanda que consistía en un error de interpretación considerar los dos artículos vigentes, cuando hacía muchos años que no se los aplicaba por estar derogados.----------

------ 2. A fs. 203/222 y vta. impetró el recurrente, contra aquella sentencia definitiva, su Recurso Extraordinario Federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundado en el art. 14 de la Ley Nacional Nº 48 en concordancia con los arts. 256 y 257 del CPCCN y precedido por la carátula exigida por ese Alto Tribunal.----------

------ En el capítulo “III- PROCEDENCIA FORMAL Y SUSTANCIAL DEL R.E.F.” arguye que la recurrida, por la que se rechazó la demanda contencioso administrativa, es una sentencia definitiva de un tribunal en instancia única, y la encuentran arbitraria. Cita fallos de la Corte Nacional.----------

------ En el punto “5- Introducción de la Cuestión Federal”, asegura que la sentencia en crisis conculca los derechos de los actores a una retribución justa, igual remuneración por igual tarea, igualdad y propiedad -detalla-, garantizados en los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. Ello, en tanto no se ajusta a la ley ni al bloque de constitucionalidad vigente.----------

------ En el acápite “6- Relación directa de la Cuestión Federal con el caso” asevera que esta última existe, atento que el apartarse del derecho vigente para liquidar los haberes, da lugar a las diferencias salariales que reclamaron y tiene conexión con el derecho a una retribución justa, amparado por el art. 14 bis, y con la observancia del derecho vigente. Estima que éste es el que figura en Digesto Jurídico del Chubut como arts. 147 y 149 de la Ley XIX Nº 8, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 2 de enero de 2009.----------

------ Encuadra en un supuesto de arbitrariedad por apartamiento de la sentencia dictada del derecho vigente. Lo entiende cuando en aquella se considera “derogada la equiparación o enganche reconocido al personal

policial de la Provincia del Chubut, cuando el Poder Legislativo lo ha considerado vigente". Arguye que el fallo en crisis, al afirmar la derogación de normas en vigor y en las que fundaron los actores sus derechos, exhibe un fundamento aparente, expresado con excesivo rigor formal y se aparta de la ley vigente, en perjuicio de garantías operativas que la Constitución Nacional reconoce a todos los trabajadores en los arts. 14 bis, 75 incs. 22 y 23, como es la retribución justa.----------

------ Aduna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero, referida a la "manifiesta irrazonabilidad de la argumentación…" en el que el razonamiento expone una solución "contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia", que habilitan la vía intentada. Entiende que ello permitirá "la debida preservación de los principios básicos" constitucionales receptados en los arts. 18 y 33, para el resguardo del derecho a una retribución justa, en base al de igual remuneración por igual tarea, "en los términos de la equiparación salarial con la Policía Federal". Finalmente cita otros precedentes y doctrina relativa a la arbitrariedad que denuncia, a la "privación de justicia" y a la "garantía de doble instancia" contenida en Pactos Internacionales.----------

------ En el punto "7-El gravamen real, concreto y actual que ocasiona a los recurrentes la sentencia en crisis", aquél lo encuentra en que ésta no ha sido fundada "en el derecho vigente" y en que disminuye ilegítimamente sus retribuciones, las cuales estima que debieron percibir conforme a la equiparación de los sueldos de la Policía Federal reconocida -dice- en los arts. 147 último párrafo y 149 primer párrafo in fine de la Ley XIX Nº 8 del Digesto Jurídico vigente. Añade que el agravio económico que aquélla provoca se configura por las diferencias salariales rechazadas apartándose de la ley en vigor, so pretexto de estar derogada. Esto lo tilda de falso.----------

------ Reseña, en el apartado IV, los antecedentes de la causa (fs. 208 vta./217).----------
-

------ Y, en el capítulo "V- Fundamentos del recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria" reitera lo expuesto en el acápite 6, antes mencionado. Luego señala que no se ha interpretado adecuada y razonablemente el Decreto Ley Nº 1700 en el fallo en crisis, dado que el art. 69 dispuso derogar toda otra norma legal que estableciera regímenes de remuneraciones para los sectores del personal dependiente de la Administración Pública Provincial "pero, omite tener el cuenta que dicho decreto no ha derogado específicamente los arts. 148 y 151 del Decreto Ley Nº 1561" -asegura-.----------

------ Critica la interpretación del Decreto Ley Nº 1700 expresando varios argumentos contradictorios y novedosos, a fin de arribar a su propia interpretación del régimen policial, circunscripta a negar que el art. 69 de dicho decreto haya derogado "el sistema de enganche" de aquel art. 148.-

------ Sin embargo coincide el recurrente con los tres votos del fallo que impugna en que “el art. 69° de ese mismo texto legal…dispuso la derogación de toda otra norma legal que establezca regímenes de remuneraciones para el personal dependiente de la Administración Pública Provincial o Municipal”. Admite también que en ese Decreto se estableció un régimen de remuneración para el personal de seguridad y así lo describe: “le estableció una suma fija consignada en el Anexo XI de ese instrumento, a lo que se adunaban adicionales y suplementos comprendidos en el capítulo III de la Ley 1561” (fs. 218 vta.).----------

------ Plantea a la par dos cuestiones novedosas -lo son, atento que no han sido presentadas antes para que se analizaran en el fallo en crisis-, con el ostensible objetivo de que no se aplique el art. 69 de dicho Decreto Ley N° 1700.----------

------ Por un lado arguye que como éste fue dictado bajo el régimen de un gobierno de facto, para su validez debía refrendarse, atento que se dictó “ad referéndum del Ministerio del Interior”. Duda que esto se haya cumplido, manifestando que “no existe constancia”.----------

------ Por otro, confusamente pide aplicar el art. 68 de dicho Decreto Ley Nº 1700, argumentando que en éste se autorizó al Poder Ejecutivo a modificar las remuneraciones que se establecían -a través del mismo- como consecuencia de la política salarial que dispusiera el Gobierno Nacional. Para el recurrente debe entenderse que ésta “no es otra que el enganche salarial en un 88% del nivel de remuneraciones”. De esto deduce -sin explicar cómo arriba a esta conclusión- que “mal puede aplicar (se) desde entonces, a la Policía Provincial, el Anexo que contiene el capítulo X... y Anexo XI, que resulta in peius del personal policial...”.-

------ Intelige que en oportunidad de “confeccionar...el Digesto Jurídico los académicos de la UBA” no interpretaron que dicho art. 69 del Decreto ley Nº 1700 derogase el sistema de enganche de aquel art. 148, porque aquel no contiene ningún porcentaje o coeficiente remunerativo alcanzado o modificado por tal decreto, sino que se garantizó o aseguró un piso del 88% de los haberes que percibe la Policía Federal Argentina para igual grado o jerarquía, porque -a su juicio- ningún dispositivo autorizaba “desengancharse”.----------

------ Intenta forzadamente y planteando cuestiones novedosas, que se interprete que el “enganche” a los salarios de la Policía Federal continúa vigente y que este precepto (art. 69) no derogó el dicho art. 148, como se concluyó en la sentencia apelada. Exhibe su propio razonamiento acerca del alcance de este último, sin lograr rebatir el que el fallo desarrolla ampliamente.----------
-

------ Alude a otras modificaciones que la Ley Nº 4124 en el año 1995 introdujo al régimen policial, sustituyendo los arts. 149, 150, 153, 155, 161 y critica que el fallo no lo analizara. Sin desarrollar este argumento, concluye que a su juicio no estaban derogados por el Decreto ley Nº 1700 "los artículos mencionados del Decreto Ley Nº 1561" (fs. 218 vta.).----------

------ Finalmente, encuentra también que se equivoca el fallo impugnado cuando concluye en la derogación del sistema de cálculo del rubro zona desfavorable al dictarse la Ley Nº 5718. Dice que no fue derogado ni expresa ni tácitamente, sino que ésta es "complementaria" del art. 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley Nº 1561 (fs. 220 vta. y 221).----------
----- En cuanto al Digesto Jurídico, menciona que su texto definitivo se puso a consideración de la Honorable Legislatura Provincial por el plazo de un año, de las comisiones permanentes, también del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que no lo objetaron. Entonces así fue sancionado en enero de 2009, aprobado expresamente por el Poder Legislativo tal como se encuentra publicado. Refiere que "a la fecha, han pasado dos integraciones de las Cámaras legislativas", solicita considerar que por esto fue aprobado en dos oportunidades y por unanimidad "sin que ninguna propicie alguna modificación del texto vigente del Decreto Ley 1561 (ahora denominado XIX Nº 8) por considerarlo erróneo" (fs. 219). Encuentra que los votantes, en el fallo en crisis se han arrogado facultades exclusivas del Legislador al analizar históricamente normas para "terminar sin el debido fundamento, apartándose del texto aprobado vigente" que "omiten aplicar".----------
-

------ Alude a las técnicas empleadas en la elaboración del Digesto Jurídico, dice que éste se ajustó a las mismas y menciona las Leyes Nº 5199 y Nº 5816 (fs. 220 y vta.). Insiste en que no han sido derogados los dos preceptos que se pidieron aplicar en el objeto de la demanda.----------
----- En el capítulo VI efectúa la reserva de acudir ante la CIDH.----------

------ 3. Corrido el traslado de rigor, nada expuso la contraria en el momento procesal oportuno.----------

----- **CONSIDERANDO:** ----------

------ I. Que compete a este Cuerpo efectuar, en primer término, un estricto control formal del Recurso Extraordinario, para verificar el cumplimiento de las Acordadas N° 04/07 y 38/11 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.----------

------ La primera de ellas "...viene a establecer parámetros claros y definidos respecto a la forma en que deben articularse tanto el Recurso Extraordinario Federal como la presentación directa por denegación de aquél. Basándose en sus potestades reglamentarias y en la conveniencia de catalogar los requisitos de admisibilidad de estas vías impugnativas, el

Alto Cuerpo detalla en diez artículos los recaudos formales que deberán cumplir a los fines de su admisibilidad.” (Conf.: Maximiliano CALDERÓN y Eduardo PERELLI - “La Acordada 4/2007. El principio de inadmisibilidad y sus excepciones”; publicado en LL Sup. Esp. Técnica Jurídica de los Recursos Extraordinarios y de queja - 2007 (abril), 27). ----------

------ Por su parte, la segunda, de carácter eminentemente práctico, dispone la utilización de papelería en formato de hoja A4 para todas las presentaciones que se realicen ante el Cimero Tribunal, a partir del 1° de Febrero del año 2012.----------

------ La Acordada N° 04/07 establece en su art. 11°, que cuando el apelante no haya satisfecho alguno de los recaudos para la interposición del Recurso Extraordinario Federal, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, previendo como excepción los casos en que “*según la sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva”*. Y manda a proceder de idéntico modo a los Jueces y Tribunales cuando denieguen la concesión del Recurso Extraordinario por no haber satisfecho los recaudos que esta reglamentación impone.----------

------ II. Desde este primer escalón de análisis, es del caso señalar, que la quejosa ha satisfecho esos requisitos de índole material, pues acompañó la carátula exigida, consignando los datos que la misma requiere. Por su parte, la pieza recursiva ha sido presentada en formato de hoja del tamaño requerido, con una extensión de diecinueve páginas, que contienen un máximo de veintiséis renglones. El tamaño de letra utilizado se ajusta al recomendado en la reglamentación.----------

------ Del mismo modo, estimamos que el recurrente en representación de los actores individualizados a fs. 204, ha introducido su pretensión de manera tempestiva. Sin embargo, resulta improcedente considerar cualquier agravio a los derechos del señor F. A. C. atenta su exclusión a fs. 169 de los presentes.----------

------ III. Que en avance la Sala abordará la admisibilidad del recurso desde las reglas contenidas en el art. 3° y sus incisos de la Acordada de que se trata, cuestión que se vincula -como es natural- con los presupuestos que habilitan la intervención de la Corte bajo las previsiones del art. 14 de la Ley N° 48.----------

------ III. a. En lo que atañe a la primera regla del art. 3°, no hay polémica posible en considerar que esta Sala del Superior Tribunal de Justicia de la provincia agota la instancia provincial y cuadra al término último tribunal de la causa que el remedio federal exige para habilitar la vía de acceso ante la Corte Suprema. También se trata la cuestión de una sentencia

definitiva que ha puesto fin a un proceso controversial cuya descripción se ha formulado en los párrafos de inicio.----------

------ III. b. Que en relación a la oportunidad en que se introduce la cuestión federal, recaudo cuyo control compete a este Superior Tribunal, es dable destacar que no se encuentra cumplido, en tanto no fue planteada en la demanda ni con anterioridad a la traba de la litis. Se ha dicho que *"...la necesidad de la oportuna deducción de la cuestión federal, halla sustento en el principio de congruencia receptado por los regímenes adjetivos del país casi sin excepción, como la delimitación del "thema decidendum" sujeto a decisión en el pleito. Es decir, entendiéndose a la cuestión federal como un planteo de derecho o una pretensión jurídica referida al control constitucional (compleja) o a la interpretación de legislación federal (simple), es lógico que quien intente alguno de esos planteos la introduzca en el proceso en la primera oportunidad procesal de que disponga"... "...la cuestión federal debe ser planteada en los escritos que establecen las bases de la litiscontestatio, porque ellos señalan las pretensiones de las partes y las cuestiones que se someten a decisión del Juez (Fallos: 175:262; 176:301; 178:381). Este importante pronunciamiento resalta el principio procesal que exige el planteo oportuno y fundado de la materia federal, objeto de la controversia"* (Silvia PALACIO de CAEIRO -"El Recurso Extraordinario Federal"pág. 71 - La Ley).----------

------ III.c. Que aventando rigorismos, y en apretada síntesis cabe apuntar que el fallo de esta Sala le es adverso a los actores, atento que rechazó sus pretensiones de percibir diferencias salariales sustentadas en dos preceptos que aparecieron publicados en el Digesto Jurídico.
Esencialmente los fundamentos son los siguientes:----------

------ Se interpretó que los actores estaban convencidos del incumplimiento de dos artículos que establecían mecanismos de liquidación de haberes y que de aplicarse, producirían además su incremento hacia el futuro. Sustentaban en su inaplicación en la liquidación de sus haberes la conducta ilícita de su empleadora Provincia del Chubut. Consideraban incumplidos el art. 148, segundo párrafo y el art. 151, primer párrafo, in fine del Decreto Ley Nº 1561. Respectivamente reproducidos sus textos al publicarse en el Digesto Jurídico en enero de 2009, ahora como artículos 147, segundo párrafo y 149, primer párrafo, in fine de la Ley XIX Nº 8.----------

------ En esta última ley mencionada, debía reordenarse el régimen policial que contenía el Decreto Provincial Nº 1561 y sus modificaciones. Se entendió, luego de un examen histórico del régimen, que ambos preceptos, que constituían el fundamento jurídico de esta acción contencioso administrativa, se encontraban derogados, pese a que erróneamente figuran en el Digesto.----------

------ Interpretaron los tres votantes, que el sistema de porcentualidad o "de enganche" con los haberes de la Policía Federal fue derogado

expresamente cuando así se lo hizo con el primero de los artículos citados, al dictarse el Decreto Ley Nº 1700.----------

------ Luego coincidieron, respecto del segundo precepto, que se configuraba un supuesto de derogación tácita, al que alguna doctrina y jurisprudencia aluden como "*derogación orgánica" o "institucional*". Afirmaron que cuando los actores solicitaban tomar la letra del Decreto Ley Nº 1561 porque contenía un sistema de cálculo del adicional por zona mediante un porcentaje, no atendían que ya las autoridades provinciales habían decidido reemplazarlo con el dictado de la Ley Provincial Nº 5718. Que en esta ley y en posteriores normas, se estableció un mecanismo diferente para computar ese rubro (el método de suma fija) y se valoró que los actores admitían que habían percibido ese concepto.----------
----

------ Se consideró aplicables el principio lex posterior derogat legi priori y el criterio de incompatibilidad de sistemas normativos.----------
----- Se advirtió que a esos dos antiguos artículos se les había adjudicado un número nuevo para ordenarlos, pero en esencia son los mismos artículos. Se resaltó que ésta era una cuestión relevante, que no puede ser soslayada para la solución del caso: "*no hay sanción legislativa de nuevas leyes, por ende no son "nuevos" esos dos preceptos*". Entonces, para restablecer los dos sistemas derogados se requería la sanción de nuevas leyes.----------

------ Se analizó el efecto de la derogación de una ley y respecto a aquellos preceptos se concluyó que no se habían restablecido los antiguos sistemas de enganche con los haberes de la policía federal ni el porcentual por zona desfavorable sobre aquéllos, como los accionantes entendían al formular su pretensión. Se ahondó en ello: para que se "restablecieran" se requería la sanción de nuevas leyes que ordenaran aplicar esos dos sistemas salariales, pues estaban contenidos en artículos derogados, lo que no ocurrió con el advenimiento del Digesto Jurídico.---

------ No aconteció esto último -se expuso- por cuanto quienes interpretaron y reordenaron el cuerpo de antiguas leyes, no podían arrogarse la función de sancionar nuevas normas, pues esto es de competencia exclusiva y excluyente del legislador. Se entendió cuál era el alcance de la Ley Provincial Nº 5199, que limitó las atribuciones de quienes elaboraron el Digesto Jurídico, en su art. 4, a las técnicas de recopilación, unificación y ordenación de normas provinciales -en ramas y números correlativos-, separándolas de otras cuando se interpretara que habían perdido vigencia.----------
-

------ III. d. Que debe tratarse a continuación el nudo de la cuestión que se plantea: si el recurrente ha hecho crítica fundada y sistemática del fallo que recurre, si esa crítica involucra cuestión federal y si ese tema fue tratado con suficiencia.----------

------ III.d.1. En principio, cabe recordar la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que si los agravios descriptos descuidan controvertir los fundamentos -concretos y determinantes- explícitos en la sentencia, y consecuentemente, omiten la crítica razonada que asegure la autosuficiencia del libelo, el Recurso Extraordinario no es admisible. La omisión de formular una crítica concreta y razonada de los argumentos que sustentan lo resuelto por el a quo es un defecto que, por sí mismo, basta para declarar la improcedencia del remedio federal intentado (Conf. CS, Fallos, 270:356; 278:121; 294:396; 295:99, entre muchísimos otros). Si el recurrente no refuta de manera contundente los fundamentos que dieron sustento a la decisión, el Recurso Extraordinario planteado deviene inadmisible (CS, Fallos: 296:639; 392; 283 y 334; 310:1465; 315:2986 y otros), atento que "el recurso carece de la suficiencia necesaria, pues no completa la crítica razonada que es exigible para ser admitido" (Fallos 302:418, 303:1366, 308:2263, 314:117, 840, 315:2896 y otros).----------

------ Entonces, "la idoneidad de toda expresión de agravios, implica que el recurrente refute las conclusiones de hecho y de derecho que sustentan la decisión del sentenciante a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha el pronunciamiento. Las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto, o las simples consideraciones subjetivas o disgregaciones inconducentes o carentes del debido sustento jurídico no satisfacen las exigencias de la carga de fundamentación autónoma" (Conf. Fallos 307:1735, 2462, 314:481, 1440, 1626).----------

------ Pues "No son aptos para abrir la instancia del art. 14 de Ley 48, los agravios que reiteran dogmáticamente los ya vertidos, sin plantear una crítica concreta de todos y cada uno de los argumentos dados para desecharlos" (CS Fallos 307: 1735,2462, 314:481, 1440, 1626).----------

------ Asimismo, cabe recordar que "las cuestiones de hecho, prueba y Derecho Público local, son ajenas como regla, y por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la Ley 48" (Fallos 304: 1443, 1826, 314:1336, JA 24 1974-116).----------

------ Aun cuando se invoque la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad -en la que se funda el recurso en examen. Adviértase que ésta es excepcional y cabe descartar dicha tacha cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto, limitándose a aquellas sentencias desprovistas de todo apoyo legal y fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, de modo que ello impida considerarlas como actos jurisdiccionales (Fallos 323:4028, 326:2156, 2555).----------

------ Cuando los razonamientos expuestos en el libelo recursivo constituyen, simplemente, la aserción de una solución jurídica distinta, y el desacuerdo con la solución dada por los jueces al pleito, se ha entendido que "La doctrina de la arbitrariedad no cubre la disconformidad del

apelante con las conclusiones del a quo... sino que sólo atiende a la exigencia constitucional de que aquéllas sean fundadas y constituyan derivación del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa" (Fallos 302:836,1030, 303:772, 310:676, entre muchos otros).----------

------ III.d.2. Que el esfuerzo recursivo, desafortunadamente, no ha refutado con eficacia los términos de la sentencia en crisis, lejos de demostrar el supuesto yerro del pronunciamiento, insiste con imponer su propia interpretación del plexo normativo que se analizó en el fallo en crisis. Incumple así con el inciso d) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007 del Alto Tribunal.----------

------ En efecto, el peticionario se desentiende de los fundamentos enunciados en la sentencia que ataca, especialmente de los conceptos jurídicos de derogación expresa y tácita, ignorando la referencia a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los acuñó y aplica. Él no rebate con suficiencia la idea nuclear del fallo dictado en el sentido que el Digesto Jurídico no sancionó “nuevas” leyes y sólo reordenó las existentes en el plexo provincial, razón por la cual los dos preceptos en cuestión se mantienen derogados.----------
----- La introducción de temas omitidos en la demanda, una estrategia, no lo favorece. Los mismos nada aportan y como sus argumentos son disímiles se anulan entre sí. Habiendo prescindido en la demanda de todo análisis normativo, vienen recién después de dictado el fallo a dar su propia interpretación del Decreto Ley Nº 1700. Debió avizorar que podría ser interpretado en la sentencia definitiva. Ahora cuestiona su validez, al requerir que no se aplique su art. 69 -el que no le favorece porque deroga expresamente el primer precepto aludido- y que si se considere su art. 68. Forzando la letra de este último dice que la política legislativa abarcaba el mantenimiento del sistema de enganche, cuando nada hace presumir que se refiera a éste, que no se menciona en ese Decreto.----------

------ III.d.3. Que desdeñados aquellos argumentos como vía de acceso al recurso federal, cabe considerar el tilde de arbitrariedad como legitimación de la propuesta.----------

------ Si hay un sector del recurso extraordinario que plantea dificultades para su identificación es el de sentencia arbitraria.----------

------ La doctrina de la arbitrariedad ha merecido numerosas opiniones de las que sólo se ha de destacar algunas. Al respecto, comentan Y. y Rey el alcance de esa doctrina y destacan que el Magistrado debe resolver sustentando la sentencia en *la ley vigente*. Reseña que “*a la condición de órganos de aplicación del derecho vigente, va entrañablemente unida la legal de los jueces de fundar sus sentencias documentando así que son*

derivación razonada del derecho vigente y no producto de su voluntad individual- y que la exigencia de que ellos tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional (Fallos 236:27). Así la Corte Nacional ha llegado ha establecer de modo firme que es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean *"conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa" (Fallos 238:550, 244:521 y 523:249 y 275, entre muchos)* (citas y comentarios en págs. 113/114 de la obra "El recurso extraordinario", de Esteban Ymaz y Ricardo E. Rey, Abeledo Perrot, 3ra. Edición actualizada, año 2000).----------

------ A lo expuesto, cabe agregar que, según lo anota Genaro Carrió, "La Corte tiene resuelto que lo atinente al carácter derogatorio de una ley común por otra del mismo carácter no constituye cuestión federal (250:2236; 253:329; 250:61; etcétera)" (El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Abeledo-Perrot, año 1967, pág. 183). Y ha reiterado el Alto Tribunal que "No habilitan la vía del art. 14 de la ley 48 las objeciones dirigidas a cuestionar el alcance derogatorio de la ley 17.500, respecto de los arts. 984 y 1017 del Código de Comercio, ya que conducen al examen de temas de derecho común, propios de los jueces de la causa." (Fallos 310:485).----------

------ III.d.4. Que el recurrente, se evoca, califica el fallo del modo visto por rechazar la vigencia de los dos artículos que figuran en el Digesto Jurídico y proporcionan fundamento a la acción. En definitiva, reitera los mismos argumentos que trajo al demandar.----------

------ Insiste en que en esto está la interpretación errónea de la sentencia en crisis. Sin rebatir lo considerado en el fallo: que se mutó de sistema de liquidación salarial, en particular, derogando el régimen anterior del Decreto Ley Nº 1561, cuando el Decreto Ley Nº 1700 estableció un haber básico para cada jerarquía, conforme luce su Anexo XI, el que contiene una columna "Básico" (BO 30/5/79, pág. 23) y sobre éste se calcularon los suplementos. Pese a que reconoce que el perjuicio deviene de este último anexo del Decreto Ley Nº 1700, se opone forzadamente a que se interprete que es el nuevo sistema que correspondía aplicar y ya no el sistema que derogó el art. 69.----------

------ Tampoco es aceptable el argumento de que en la sentencia controvertida no se analizó la Ley Nº 4124 del año 1995, que, según refieren, modificó el Decreto Ley N° 1561. Por ello, deduce que el último de los mencionados se encontraba vigente. Cabe referir que la ley citada introdujo modificaciones parciales a determinados artículos del Decreto Ley N° 1561 que no habían sido derogados por el Decreto Ley N° 1700 (año 1979), por lo cual no merecía su estudio en el fallo impugnado. Así, en cuanto al art. 148 del Decreto Ley N° 1561, con este confuso argumento no rebate el fundamento dirimente del fallo respecto de la derogación de

aquél por el Decreto Ley Nº 1700 -basado en una interpretación armónica de sus arts. 1, 47 y 69, y en el cambio de sistema de liquidación, plasmado en las planillas del anexo correspondiente. Y en referencia al art. 151 del Decreto Ley N° 1561 (adicional por zona desfavorable fijado en un porcentual), esta alegación se desentiende del marco temporal, pues el decisorio analizó que la derogación tácita se produjo muchos años después, con la Ley Nº 5718 (sistema de suma fija), régimen éste que los actores admitían que se les aplicó. Además, cabe aclarar que la numeración del art. 149 al que refiere la Ley N° 4124 no coincide con la posterior adoptada por el Digesto Jurídico. Es decir, no se trata de los mismos artículos 149.----------

------ El Tribunal en el fallo apelado ha verificado que ya no estaban vigentes esos dos métodos en el régimen policial. Analizando las sucesivas modificaciones que ha sufrido éste desde que se dictó el Decreto Ley Nº 1561, detectó que habían sido abandonados ambos sistemas de liquidación -los que los actores requerían aplicar para calcular sus salarios-, sencillamente porque fueron derogados los dos preceptos que los contenían. El recurrente no atiende que el fallo resuelve sobre la inteligencia de normas de Derecho Público Provincial cuando verifica el método implementado para pagar los sueldos de los empleados públicos provinciales -policías- y no constituye una materia que deba interpretar el Alto Tribunal de la Nación. La jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha excluido la existencia de cuestión federal cuando se trata de interpretar normas y actos locales (Conf.: Fallos, 104:51; 114:42).----------

----- Cuando el recurrente atribuye una supuesta interpretación errónea del régimen policial de la Provincia del Chubut, que endilga a esta Sala del Superior Tribunal, no atiende que esto no constituye materia de agravio idóneo para la vía intentada, aún cuando se funde en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Prevenido su alcance en el punto III de estos Considerandos, cabe agregar que una sentencia puede ser tildada de "arbitraria" cuando carece de todo fundamento jurídico, pero no cuando está fundada en ley. El error en la interpretación de ésta… sea cual fuere su gravedad, no hace arbitraria a una sentencia en el sentido propio y estricto de la expresión -que es el que debe presidir el discernimiento de la procedencia del recurso extraordinario en estos casos- porque la existencia de él es por sí sola demostrativa de que el pronunciamiento *no se ha desentendido de la ley… sino que se ha hecho según una interpretación equivocada (de ésta) tomando por verdadera la que no lo es… es decir, que no es un acto de arbitrariedad o capricho del juzgador (Fallos 205:648).*----------

------ III.d.5. En definitiva, resulta infructuoso su intento de "encorsetar" la cuestión constitucional en los arts. 14 bis, 16 y 17 cuando en la demanda nada argumentó al respecto, limitándose a solicitar la aplicación de los dos preceptos del régimen de la Policía del Chubut que la Sala entendió derogados. El fallo giró en la interpretación de este último, exclusivamente en un análisis histórico y comparativo del plexo normativo provincial, sin

analizar cuestión constitucional ninguna. Invoca aquellas mandas constitucionales genéricamente, sin demostrar la "relación directa" entre alguna cuestión federal y la sentencia en crisis.---

------ Por lo tanto, no satisface el requisito del art. 14 de la Ley N° 48 y la regulación de los puntos d) y e) de la Acordada Nº 4/07 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que toca a la refutación argumental y a la relación directa de la alegación "*…con el fallo apelado para la procedencia de la apelación extraordinaria, y tal relación directa existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente de la interpretación del precepto constitucional aducido; por el contrario, cuando la cuestión federal propuesta es ajena a los puntos decididos en la sentencia, y obviamente ineficaz para modificarla, viene a faltar entre ambas el requisito apuntado"* (CSJN, en "Ministerio de Cultura y Educación - Estado Nacional s/art. 34 de la ley 24.521", del 06/05/2008, votos de los Dres. Enrique Santiango Petracchi y E. Raúl Zaffaroni y de la Dra. Carmen M. Argibay).----------

------ IV. Que por los motivos enunciados, como resultado de la valoración liminar que exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Sala estima que no están dadas las condiciones que habilitan el recurso intentado por los actores.----------

------- V. Que según las directivas que emanan de la Acordada N° 4/07 SCJN, cuando se desestima este tipo de Recursos, "las actuaciones… se reputarán inoficiosas", debiendo proceder del mismo modo los jueces o tribunales cuando denieguen su concesión (Punto 11 - segundo párrafo).

Por lo que, conforme se resuelve y dadas las particularidades del presente, no corresponde imponer costas ni regular honorarios.--------

------ Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;---

---------- **R E S U E L V E:** ----------

------ **1°) NO HACER LUGAR** al Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el apoderado de los actores señores A.C., P. D. M, O. E.F., C.A. M., G. J. D., M. S. G., M. Á. S., M. Á., A. V. B., J. C. R., N. N. L., A.A.T., C. A. H., A. B., P. E. P., D. O. H., M. C. G., M. J. Q., J. D. V., C. A. T., J. G. G., J.F., G. S. J. Ch. L. y S. A. I.a fs. 203/222 y vta. de estos autos, para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin costas.---------- **2º) REGÍSTRESE** y notifíquese.----------

Fdo. Dres. Rebagliati Russell – Pasutti y Pfleger.
Recibida y registrada por Secretaría el 11/05/15 bajo el N° 37.